

COSTARRICENSES CELEBRAN CINCUENTA Y CINCO AÑOS SIN SOLDADOS

Vivir sin ejército no es una utopía

Costa Rica es el único país latinoamericano sin fuerzas armadas. Aunque existe una fuerte polémica sobre el entrenamiento que recibe la Policía, ciertamente es evidente, como en ninguna otra parte de la región, una relación cercana entre las autoridades de la fuerza pública y la ciudadanía.

JOSÉ ANTONIO PASTOR

TIEMPOS DEL MUNDO

SAN JOSÉ. El primero de diciembre pasado Costa Rica celebró el 55 aniversario de la abolición del ejército como institución permanente. La fecha debió ser motivo de júbilo, pero prácticamente todas las actividades programadas por el gobierno pasaron inadvertidas para la mayor parte de una población que creció sin conocer qué es el servicio militar.

Las fuerzas armadas costarricenses fueron abolidas en 1948 por el presidente José Figueres Ferrer, pocos meses después de que su Ejército de Liberación Nacional triunfara en una guerra civil, por un fraude electoral realizado por el gobierno de turno.

La eliminación del ejército, desde entonces, permitió que el Estado destinara más recursos al desarrollo de la educación y la salud, y distinguió a Costa Rica del resto de una Centroamérica entonces atribulada por golpes de Estado, dinastías, gobiernos militares y guerras civiles.

Costa Rica tiene hoy un índice de alfabetismo de menos del cinco por ciento y es el país del istmo con mejores índices de desarrollo, según informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Asimismo, cumplió un rol importante en la pacificación de Centroamérica. El Premio Nobel de la Paz



NO A LAS POLÉMICAS. El ministro Rogelio Ramos sostiene que no tiene caso polemizar sobre la militarización de la Policía y que la capacitación de los policías está acorde a la política de sacar a los oficiales de sus cuarteles y trabajar al lado de los ciudadanos.

1987, el ex presidente Oscar Arias, fue el gestor de los acuerdos de paz Esquipulas II, firmados en agosto de ese año, que impulsaron el fin de las guerras civiles en Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

Al desarmarse unilateralmente, Costa Rica depositó su confianza en las instituciones internacionales y en los mecanismos de defensa de que ella dispone, por lo que los gastos de defensa son mínimos en relación con los ingresos del Estado.

Sin embargo, la culminación de esta importante decisión se produjo el 17 de noviembre de 1983, durante la administración de Luis Alberto Monge, quien dictó la Proclama de Neutralidad como síntesis de los valores de paz, libertad y no

intervención en los asuntos internos de otros países. Dicha proclama ha recibido el respaldo de numerosas naciones.

Para el historiador y analista político Vladimir de la Cruz, lo más importante de aquella decisión fue que los años han demostrado que Costa Rica podía defender su soberanía sin necesidad de ejércitos, que tanto daño han provocado en América Latina, respecto a la corrupción, violación de los derechos humanos, torturas y desapariciones físicas.

Sin embargo, agrega, "hemos vivido sin ejército, pero hemos alimentado una tendencia militarista muy peligrosa en la capacitación de los cuerpos policiales que desde entonces se crearon".

Recordó que Costa Rica envió durante la existencia de bases militares en Panamá una gran cantidad de policías a entrenarse como soldados.

"Además, se prepararon en centros militares de Estados Unidos, Chile, Alemania, Taiwán, Corea del Sur, Israel y España, entre otros. Después se impulsó la creación de la Escuela Nacional de Policía y la Academia Militar del Murciélagos, con entrenamiento militar, más que policial, al servicio de la lucha contra el insurgente centroamericano."

Según datos del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, las fuerzas policiales cuentan en la actualidad con un presupuesto cercano a los 75 millones de dólares y un total de 10.148 efectivos. La Fuerza Pública está conformada por 10 direcciones regionales, que se encargan de mantener el orden público y velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos y sus bienes, así como prevenir y reprimir la comisión de delitos penales dentro del país.

Para el ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, no tiene caso entrar en polémicas sobre si la Policía ha sido militarizada o no, pues es evidente que los efectivos de las fuerzas públicas no reciben ningún tipo de capacitación militar.

"Para empezar, la mayoría nunca vio un tanque o armamento pesado y su entrenamiento consiste de 1.050 horas en las que se les capacita sobre derechos humanos, procedimientos penales y aspectos técnicos. Además, durante nuestra gestión impulsamos el programa de Policía de proximidad, que vincula muy de cerca al ciudadano con lo que hace la Policía. Yo quisiera que me dijeran qué ejército permite ese tipo de relación", se preguntó el funcionario.

Agregó que en los últimos años también se cerraron varios cuarteles y se eliminaron los rangos militares, así como los uniformes de corte militar que aún se utilizaban en algunos departamentos de la fuerza pública. ♦

LIDERAZGO CIVIL GUATEMALTECO DESCANSA EN EL PODER MILITAR

Nueve mil soldados listos para el retiro

AMAFREDO CASTELLANOS

TIEMPOS DEL MUNDO

La democracia guatemalteca tambaleó durante la gestión del presidente Alfonso Portillo, quien entregará el poder el 14 de enero, después de cuatro años de mandato. Un enfrentamiento sin tregua con el poder económico se tradujo en varios intentos de golpe de Estado.

El mandatario, con una sociedad desencantada, y virtualmente aislado, consiguió asegurarse el respaldo castrense para sostenerse en el cargo. La democracia sobrevivió en tanto el ejército ganó fortaleza y poder.

El cambio de liderazgo nacional, el 14 de enero, abre "grandes signos de interrogación" para la democracia guatemalteca, según la diputada izquierdista y ex activista por los desaparecidos, Nineth Montenegro.

"La democracia no debe sostenerse en poderes fácticos, porque entonces no tiene significado y se convierte en una simple 'fachaleta'", dijo a TIEMPOS DEL MUNDO en referencia al reto que corresponde asumir al nuevo presidente.

Los gobernantes guatemaltecos, desde el restablecimiento de la democracia en 1986 y después de 15 años de regímenes militares, han descansado en el poder de las fuerzas armadas para garantizar su permanencia hasta el final del período para el que fueron electos.

Así lo hizo Vinicio Cerezo —1986-91—, quien sobrevivió varias intentonas golpistas, en tanto que su sucesor Jorge Serrano —1991-93— comprobó que sin el apoyo del Ejército no le quedaba más que el exilio, tras romper el orden institucional y asumir poderes extraordinarios bajo el argumento de que era víctima de "chantaje" por parte de diputados corruptos.

En 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz, el nuevo orden para la institución castrense estaba definido por uno de esos acuerdos: fortalecimiento de la sociedad civil y papel del ejército en una sociedad democrática, en el que se establece un programa de reducción de efectivos y se le definen nuevas funciones limitadas a la protección de la soberanía nacional, lejos de la seguridad interna.

Ocho años después del cese del conflicto, el ejército está más fortalecido, y si bien se operó una reducción en su número de efectivos, su poder de decisión en los asuntos nacionales sigue sin variantes significativas.

El Ejército no retiró el apoyo a Portillo, cuando éste estuvo varias veces sumido en crisis de gobernabilidad como consecuencia de graves escándalos de corrupción, en lo que fueron coyunturas paralelas y parecidas a las que experimentó el presidente venezolano, Hugo Chávez.



PERSISTENCIA. Los militares guatemaltecos son los de mayor influencia, en toda la región, sobre el poder de los civiles.

Este apoyo no fue gratis. El Ejército obtuvo continuamente millonarias transferencias presupuestarias, todas ellas detectadas y denunciadas por Montenegro.

¿Se viene una nueva era?

Para el 2004, el Ejército guatemalteco dispondrá de un presupuesto de 118,7 millones de dólares y no de 157,7 que el

gobierno de Portillo, a través de su ministro de Finanzas Eduardo Weyman, había proyectado.

En noviembre, en el marco de la contienda electoral, el legislativo —dominado por el partido de gobierno— no aprobó el nuevo presupuesto, por lo que registró el mismo que funcionó en el 2003 y al ejército corresponde la misma partida: 118,7 millones de dólares.

La diferencia radica en que, de acuerdo con las cuentas de Montenegro, por medio de las transferencias presupuestarias en el 2003, la institución obtuvo adicionalmente otros 56 millones de dólares, el 48.5 por ciento de incremento respecto a su asignación presupuestaria.

En el 2004, adicional a los 118,7 millones de dólares, el Ejército espera una partida de 53 millones de dólares para

cumplir sus compromisos de desmovilización de 9.000 de sus 31.000 efectivos.

Montenegro expresó preocupación al indicar que este compromiso no se cumple si dicha partida adicional no se le asigna. El debate acerca de la dimensión, recursos y funciones del ejército guatemalteco entran en las expectativas de "una nueva era" que se enfrenta a "muchos desafíos", según la congresista. ♦